

votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*José M^a del Castillo Velasco.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*L. Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M^a Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Agosto 5 de 1872.—*Lic. Agustin Peralta,* oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Chiapas por Manuel de Jesus Villafuerte, contra el Juez de 1^a instancia del Departamento del centro que le ha negado la excarcelacion bajo de fianza.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El doce del mes próximo pasado, según se ve del ocurso, el preso D. Manuel de Jesus Villafuerte se dirigió á este Juzgado, quejándose contra el juez de 1^a instancia del ramo criminal de este Departamento, por no haberlo excarcelado bajo de fianza, y sí reduciéndolo á formal prision, por un delito de heridas leves que se le sigue, inferidas al C. Ambrosio Villafuerte, y que según el artículo 116 de la ley reglamentaria de administración de justicia del Estado, de 15 de Enero de 1863, se castiga con pena pecuniaria, juzgando, en consecuencia, violada en su persona la garantía individual que le concede el artículo 18 de la Constitución Federal, á pesar de lo prevenido en el artículo 8^o de la ley general de 20 de Enero de 1869, que terminantemente niega el recurso que solicita, en los negocios judiciales. Con tales fundamentos, pidió amparo y protección conforme al artículo 1^o, parte 1^a de la ley ya citada.

Este Juzgado, en uso de la facultad que le concede el artículo 9^o de la misma ley, pidió informe justificado al C. juez de 1^a instancia respectivo, que fué emitido dentro del término legal. En él se manifiesta, previas otras razones de peso, que á dicho quejoso la autoridad le negó la excarcelación, fundándose en la fracción 9^a del artículo 31 de la ley de 5 de Enero de 1857, y le redujo á formal prision, no por el solo hecho de que últimamente se le juzga, que es leve, sino por reincidencia, y mas que todo porque pendientes dos causas de delitos graves, en las cuales se halla complicado, y de las cuales se ha mandado hacer la acumulacion competente, juzga no deber excarcelarse, puesto que habiendo hecho un mal uso de la benignidad del Juzgado, excarcelándolo durante los otros dos juicios, debe á la vez, según se insinúa, hacer una escrupulosa averiguación de los hechos, y aplicar al triple reincidente el condigno castigo que merece.

De este breve análisis, el Promotor deduce: que si hubiera de hacerse apreciaciones que justificasen los procedimientos del juez informante, que no los crece desacertados, habria de hacerse presente la triple reincidencia de Villafuerte; reincidencia que por el artículo 31 de la ley de 5 de Enero de 1857, fracción 9^a, se tiene por una circunstancia agravante, corroborada con la doctrina de autores entre ellos el Sr. Escribche en la palabra *hurto* que conceptúa al ladrón reincidente por tres veces como á *ladrón famoso*, y cuya prueba de reincidencia la ha rendido el mismo quejoso, con las certificaciones de autos de bien preso y de excarcelación, que en su contra se han dictado en distintas ocasiones: habria de llamar vivamente la atención del Juzgado que el artículo 116 de la ley reglamentaria del Estado de 15 de Enero de 1863, en que el mismo Villafuerte funda su solicitud para ser excarcelado,

no impone solamente pena pecuniaria á los delitos leves, sino que á arbitrio del juez, impone la corporal de dos meses de obras públicas ó prision, ó la pecuniaria de diez á veinticinco pesos de multa; y que sujetándolo dicho artículo, que en su favor evoca, á la pena corporal, que el artículo 18 de la Constitución exige para la prision, se sigue que por este mismo artículo constitucional ha lugar á decretarla en su contra.

Empero, el fiscal, no despreciando estas indicaciones, que para este caso y otros semejantes las juzga de peso; el principal apoyo de su razonamiento lo funda en la conveniencia y necesidad que hay de observar en todas sus partes la ley de amparo de 20 de Enero de 1869, pues á su juicio, lo dicho y todo lo mas que una pluma afluyente pudiera decir, apareceria sombrío y de poca entidad á la consideracion sola del torrente de males y dificultades que se desbordarian, destruyendo la concordia y buena inteligencia que debe haber en la legislacion que norma los procedimientos de las autoridades de distintos ramos, si hubiera de admitirse el amparo en esta clase de juicios, contra lo prevenido en el artículo 8º de dicha ley; dificultad que, á no dudar, el Soberano Poder Legislativo de la Union, explayando razones de inmenso peso, zanjó estableciendo la excepcion que aquel encierra, y á las que como óbolo de arena el fiscal puede agregar la que sigue, por si fuere atendible: si este recurso se estableciera en los negocios dichos, los reos, con conciencia ó sin ella de su delito, en el acto solicitarian esta gracia como primera tabla salvadora de sus aberraciones; las autoridades federales con esta ocasion, arrastradas de su deber, se entrometerian á la inquisicion de los sumarios, que en el fuero comun por su naturaleza son reservados, y esto para publicarlos segun se previene en el artículo 12 de la ley de amparo, y las del Estado, es decir,

sus autoridades, tanto inferiores como superiores, quedarian convertidas en simples espectadores, nulificada la mayor parte de sus facultades y prejuzgado ya el delito que con anterioridad á ellas estaba encomendado; enseña ó facultad que en el evento no muy difícil de querer conservarla con dignidad y el buen derecho que estas creyeran tener, habria de crear dificultades enormes y peligrosas que la razon, el buen sentido y la necesidad social deben conjurar, despreciando la pena pasajera de un reo, que con pocas excepciones siempre la merece.

Por todo lo expuesto, el Promotor opina y cree no fundada la queja de Villafuerte, y que por tanto, careciendo de apoyo y fundamento su solicitud, no se difiera á ella. Opinion que mas afianza en la terminante prevencion del artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, que lo juzga adecuado, y como el único talisman para guardar un perfecto equilibrio entre las facultades de las autoridades federales y las del Estado.

Así opina el Fiscal, pero siempre atento á la mas prudente y acertada resolucion del Juzgado.

San Cristóbal L. C. Julio 4 de 1872.
—Carlos Ballinas.

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Julio seis de mil ochocientos setenta y dos.—Visto este juicio de amparo, promovido en doce de Junio anterior por el preso D. Manuel de J. Villafuerte, pretendiendo estar violada en su persona la garantía de que trata el artículo diez y ocho de la Constitución general de la República, por no habersele excarcelado bajo de fianza, en la causa que el Juzgado de 1ª instancia del ramo de lo criminal de este departamento, le instruye por heridas inferidas al C. Ambrosio

Villafuerte; el informe rendido por el propio Juzgado y los documentos justificativos que acompaña; las pruebas producidas por el promovente; lo alegado por el mismo y por el ministerio fiscal; la citación para sentencia y cuanto mas verse debía; y considerando: que si bien, con presencia de las constancias de autos, puede comprenderse la naturaleza é importancia de los hechos que se versan y juzgarse de ellos para apreciarlos convenientemente, á fin de concederse ó negarse, en su virtud, el amparo pedido, no parece debido hacerlo, porque semejante procedimiento implicaría consideraciones, que preocuparían el resultado de la causa que se instruye al quejoso, y coartaría la libertad del Juzgado, que tiene la misión de instruir la y resolverla conforme á las leyes: que si segun estas, el quejoso cree tener derecho á ser excarcelado bajo de fianza en la causa á que se refiere, y el Juzgado de su conocimiento se lo ha denegado, estando obligado á otorgársela, no solo puede pedir quien corresponda, si le conviniere, reparacion de la providencia que lo agravia, sino que tambien la responsabilidad de la conducta de aquel, si ha trasgredido la ley: que la admision de amparo, en casos de la naturaleza del presente, embarazaría el orden establecido en los procedimientos judiciales, haria de la administracion de justicia un laberinto intrincado, y pondria en peligro el resultado de los juicios, si el juez de su instrucción se viese precisado, como se veria á cada paso, á revelar su estado, in conveniente de revelarse casi siempre, por el secreto ó sigilo que ellos demandan, para su mejor éxito en desagravio de los particulares ó de la vindicta pública ofendidos, y acaso tambien de los mismos procesados: que si contra lo que se ha sostenido en el primero de estos considerandos, pudiera entrarse con anplitud y con franqueza al exámen de alguno de los detalles de este juicio, fá-

cil seria sostener, con copia de razones, que en el caso actual no seria debido concederse el amparo, porque quien lo ha promovido, no ha probado estar en el caso del artículo diez y ocho de la Constitución, justamente porque la circunstancia de que un delito sea leve, motivo en que se apoya para estimar violada la garantía que reconoce el propio artículo, no entraña la condicion precisa de no merecer sus autores pena corporal, como seria de convencerse teniéndose presente los artículos 115 y 116 de la ley reglamentaria vigente de administracion de justicia del Estado de 15 de Enero de 1863, en los cuales se dispone que los delitos leves de heridas se penen con dos meses de obras públicas ó de prision; penas que no pueden dejar de ser corporales, por mas que los delitos á que se deban aplicar sean leves: que, y finalmente, es claro y está fuera de toda duda el tenor del artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, que declara no ser admisible el recurso de amparo en los negocios judiciales, y está demostrada la necesidad y conveniencia de su exacta observancia, no solo en principio sino tambien en la práctica; con presencia de lo expuesto y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 8º, capítulo 2º de la citada ley, se declara: que no ha lugar al amparo que en el presente juicio demanda D. Manuel de Jesus Villafuerte, haciéndose saber á quienes corresponda y elevándose estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision, con copia del pedimento fiscal y de este auto, en cumplimiento de la circular de 31 de Diciembre de 1870, de aquella misma alta superioridad.

Así lo proveyó, mandó y firmó el C. Tit. Juan José Ramirez, juez de Distrito del Estado, ante mí el infrascrito escribano del despacho, que da fé.—(Firmados)—*Juan J. Ramirez.—J. Crisóstomo Lara.*

Son copias que certifico. San Cristó-

bal Las Casas, Julio 6 de 1872.—*J. Crisóstomo Lara.*

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 26 de 1872.—Visto el juicio de amparo que en 12 de Junio último, promovió ante el juez de Distrito del Estado de Chiapas Manuel de Jesus Villafuerte, exponiendo: que el juez de 1.^a instancia del ramo criminal del Departamento del Centro, en un proceso que le instruye, le ha negado la excarcelacion bajo de fianza, con violacion de la garantía que otorga el artículo 18 de la Constitucion federal, porque el delito que se le imputa no merece pena corporal. Visto el informe del juez responsable del acto reclamado, fundando la denegacion de que se queja el promovente, en que el proceso que le sigue por varias acusaciones criminales, no permite la excarcelacion. Vistas las pruebas rendidas en este juicio; los pedimentos del Promotor Fiscal; los alegatos del quejoso y la sentencia del juez de Distrito.

Considerando: que conforme á las leyes, es atribucion exclusiva del juez que conoce de un proceso criminal, estimar si procede ó no la excarcelacion bajo de fianza que solicita el acusado, quien en caso de una decision ilegal tiene para corregirla los recursos que otorga el derecho comun: que en este concepto, en la denegacion judicial de que se queja el promovente, no hay la violencia que constituye una violacion de garantía, y por lo mismo no existe la que reclama invocando el artículo 18 de la Constitucion Federal.

Con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente:

Es de confirmarse y se confirma la sentencia que pronunció el juez de Distrito del Estado de Chiapas, en San Cris-

tóbal Las Casas, á seis de este mes, declarando que no ha lugar al amparo que en el presente juicio demanda D. Manuel de Jesus Villafuerte.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M.^a Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Agosto 5 de 1872.—*Lic. Agustin Peralta,* oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por el reo condenado á muerte y puesto en capilla, Estéban Sanchez

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. juez de Distrito:

Por desgracia, y á pesar de los principios tutelares de la humanidad, no está todavía absolutamente abolida la pena de muerte en nuestra República. El artículo 23 de la Constitucion general aplaza la abolicion para un tiempo que aun no llega; y al enumerar los delitos á los que por ahora debe continuar aplicándose aquella pena, comprende expresamente á los salteadores de caminos; y precisamente es este delito, segun el informe del C. juez 1.^o de lo criminal, por el que fué enjuiciado Estéban Sanchez, en el que estuvo convicto y confeso, y por el que fué condenado á muerte, se-